

Convivencia escolar y bienestar en la provincia de Biobío

Las denuncias por convivencia escolar siguen marcando un complejo escenario en la provincia de Biobío. Según informó La Tribuna, en lo que va de 2025 se han registrado 26 casos, una cifra apenas inferior al mismo periodo del año pasado, pero que representa casi una quinta parte de todas las denuncias de la región. Más allá del número, lo preocupante es la persistencia del problema, sobre todo, porque la escuela debiese ser un espacio de protección, aprendizaje y bienestar emocional.

A nivel nacional, el panorama tampoco mejora. Hasta septiembre de 2024, la Superintendencia de Educación recibió más de 8 mil 800 denuncias de convivencia escolar, alcanzando un récord histórico. Regiones como Tarapacá, Valparaíso y el propio Biobío experimentaron alzas de dos dígitos. En muchos de estos casos, se repite un patrón: conflictos entre estudiantes, agresiones físicas o verbales, y un deterioro sostenido de la salud mental al interior de las comunidades educativas.

Las causas de esta crisis son múltiples, pero desde un enfoque psicosocial, especialistas apuntan a factores que van más allá del aula. La pandemia dejó huellas profundas: el aislamiento, la inseguridad emocional y el retorno abrupto a la presencialidad alteraron la dinámica escolar. A esto se suma un entorno social que ha naturalizado la agresividad, con jóvenes que enfrentan dificultades para expresar emociones o resolver conflictos sin violencia.

El psiquiatra Felipe García, de la Universidad de Concepción, ha advertido que muchos estudiantes presentan hoy menos habilidades de regulación emocional, exacerbadas por la hiperconectividad digital y la escasa contención adulta. En paralelo, docentes de la región han

alertado sobre un cambio de actitud entre sus alumnos: más individualismo, menor compromiso y una creciente indiferencia ante el daño al otro.

Lo cierto es que las escuelas no pueden abordar solas esta realidad. En la región, la Superintendencia ha reforzado talleres y procesos de mediación entre familias y establecimientos, para intervenir antes de que los conflictos escalen. A nivel nacional, el Ministerio de Educación impulsa una Estrategia de Bienestar y Convivencia, y un proyecto de ley que busca integrar el buen trato y la salud mental como componentes esenciales de la vida escolar.

Pero como bien ha señalado el propio ministro Marco Antonio Ávila, “no resolveremos nada si incorporamos solo elementos sancionatorios”. El problema requiere una respuesta estructural, basada en la formación emocional, la participación de las familias, el trabajo preventivo, y la inversión en profesionales del área psicosocial: psicólogos, trabajadores sociales y mediadores escolares.

No se trata solo de estadísticas, sino de niños, niñas y jóvenes que deben enfrentar el día a día en aulas donde el respeto y la seguridad se han visto comprometidos. Y también de docentes y asistentes que muchas veces no cuentan con herramientas suficientes para contener ni mediar.

Recuperar la escuela como espacio de cuidado y formación integral es una prioridad. La convivencia escolar es una expresión del tejido social más amplio, y su deterioro nos interpela como comunidad. Sanar las aulas del Biobío requiere más que protocolos: exige voluntad, escucha activa, apoyo concreto y una cultura que valore el diálogo y la empatía como ejes de toda educación.